

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA - 76001310500420240043400 - DIANA ROCIO ARIAS OSORIO C.C. 63352465

Desde BAE ABOGADOS EXPERTOS SAS <baenotificacionesjudiciales@gmail.com>

Fecha Vie 17/01/2025 16:32

Para Juzgado 04 Laboral Circuito - Valle del Cauca - Cali <j04lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC diana_ado@yahoo.com <diana_ado@yahoo.com>; consultas@proyectaabogados.co <consultas@proyectaabogados.co>; ariasvega.abogados@gmail.com <ariasvega.abogados@gmail.com>; defensaj04laboralbae@gmail.com <defensaj04laboralbae@gmail.com>; notificacionesjudiciales@porvenir.com.co <notificacionesjudiciales@porvenir.com.co>; Buzon ProcesosJudiciales <procesosjudiciales@colfondos.com.co>

 1 archivo adjunto (14 MB)

CONTESTACION 76001310500420240043400 DIANA ROCIO ARIAS OSORIO.F.pdf;

No suele recibir correo electrónico de baenotificacionesjudiciales@gmail.com. [Por qué es esto importante](#)

Honorable:

JUZGADO CUARTO 4 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
(j04ccali@cendoj.ramajudicial.gov.co)
E.S.D.

REFERENCIA: ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA
DEMANDANTE: DIANA ROCIO ARIAS OSORIO C.C. 63352465
DEMANDADO: COLPENSIONES y OTROS
RADICACIÓN: 76001310500420240043400

ASUNTO: CONTESTACIÓN DEMANDA

De la manera más atenta, y dentro de los términos procesales oportunos nos permitimos remitir la contestación dentro del proceso de la referencia, junto con el poder de sustitución, pruebas relacionadas dentro del acervo probatorio del cuerpo de la contestación de la demanda.

Así mismo me permito indicar que, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 2213 de 2022 que estableció la vigencia permanente del Decreto 806 de 2020, simultáneamente se efectuó envío de la contestación de la demanda con sus respectivas pruebas y anexos, a la dirección de correo electrónico indicada por la parte demandante en el libelo introductorio de demanda para efectos de notificaciones y al correo electrónico del apoderado, a saber.

Adjunto Contestación en archivo PDF con anexos.

Solicitamos muy amablemente, que a la vuelta de este correo nos acuse su recibo.

Muchas gracias por su atención.

Cordialmente;

JAHNNIK INGRID WEIMANN SANCLEMENTE

Representante Legal

BAE BUFETE DE ABOGADOS EXPERTOS SAS

Cel: 3118694935

Calle 5 Norte, Cl. 5 #1N - 95 Edificio Zapallar

Cali - Valle



Señor: 2024_26714168
JUEZ CUARTO (04) LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
j04ccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
E. S. D

REFERENCIA: ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA
DEMANDANTE: DIANA ROCIO ARIAS OSORIO C.C. 63352465
DEMANDADO: COLPENSIONES y OTROS
RADICACIÓN: 76001310500420240043400

ASUNTO: PODER ESPECIAL

JAHNNIKI INGRID WEIMANNS SANCLEMENTE, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.959.623 de Cali (Valle), en mi calidad de representante legal de la firma **BAE BUFETE ABOGADOS EXPERTOS S.A.S.**, bajo el NIT 901.286.009-1 sociedad con domicilio principal la ciudad de Cali, actuando en nombre y representación de la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones para realizar las actuaciones necesarias para la defensa jurídica de esta Entidad dentro del proceso del asunto, mediante poder general otorgado por la escritura pública No. 44 del 10 de Enero de 2025 de la Notaria Once (11) de Bogotá.

A su vez, manifiesto que a través del presente escrito **SUSTITUYO** poder al abogado **LUIS ALBERTO ARIZA CASTELLANOS**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.030.589.841 expedida en Bogotá, y portador de la Tarjeta Profesional No. 418.875 del C.S.J., para que realice la defensa y continúe con el debido proceso para que ejerza la defensa jurídica en los intereses de Colpensiones.

En consecuencia, sírvase reconocer personería al mencionado abogado, en los términos del presente mandato.

Renuncio a término de notificación y ejecutoria del auto favorable.

De usted,

Respetuosamente,

Acepto,



JAHNNIKI WEIMANNS SANCLEMENTE
C.C. No. 66.959.623 de Cali
T.P. No. 121.179 del C. S. J.



LUIS ALBERTO ARIZA CASTELLANOS
C.C. No. 1.030.589.841 de Bogotá
T.P. No. 418.875 del C. S. J.

Señor:

2024_26714168

JUEZ CUARTO (04) LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI

j04ccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

E.

S.

D

REFERENCIA: ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA
DEMANDANTE: DIANA ROCIO ARIAS OSORIO C.C. 63352465
DEMANDADO: COLPENSIONES y OTROS
RADICACIÓN: 76001310500420240043400

ASUNTO: CONTESTACION DEMANDA

LUIS ALBERTO ARIZA CASTELLANOS, abogado en ejercicio, debidamente identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi calidad de apoderado judicial sustituto de la Administradora Colombiana de Pensiones - en adelante COLPENSIONES - cordialmente solicito al Despacho reconocerme personería para actuar de acuerdo con la sustitución de poder otorgado por la doctora **JAHNNIK INGRID WEIMANNS SANCLEMENTE**, en su calidad de apoderada principal de la entidad demandada, tal y como consta en el poder adjunto y estando dentro del término de la oportunidad procesal, de manera respetuosa me permito dar contestación a la demanda propuesta dentro del proceso de la referencia instaurado contra mi representada, para que mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada, se absuelva a mi representada de todas y cada una de las pretensiones propuestas en la demanda y se condene en costas a la parte demandante.

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD DEMANDADA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y DOMICILIO.

La Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- es una empresa industrial y comercial del estado del orden nacional, organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, cuyo objeto consiste en la administración estatal del régimen de prima media con prestación definida incluyendo la administración de los beneficios económicos periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005 modificadorio del artículo 48 de la constitución Política, de acuerdo con lo que establezca la ley que los desarrolle.

La representación legal la ejerce el Doctor **JAIME DUSSAN**, y su domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., en la Carrera 10 No. 72-33 Torre B piso 11, número telefónico 2170100.

PRONUNCIAMIENTO EXPRESO FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

De conformidad con lo preceptuado en el numeral 3 del artículo 31 del CPT y de la SS, me permito pronunciarme respecto a los hechos de la siguiente manera, con el fin de que se fije el litigio en cada uno de ellos, atendiendo a la naturaleza jurídica de la entidad y a que los hechos que se tomen como ciertos no constituye prueba de confesión.

AL HECHO 1; ES CIERTO; Que la demandante nació el 12 de octubre de 1968, tal como obra en el acápite de pruebas y expediente administrativo.

AL HECHO 2; NO ES CIERTO; La actora estuvo inicialmente afiliada al régimen de prima media con prestación definida entre el 01 de octubre de 1995 y el 31 de agosto de 1996, administrado por el otrora INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy COLPENSIONES, toda vez, que son situaciones que debe probar el demandante durante el proceso.

AL HECHO 3; ES CIERTO; de acuerdo a la historia laboral emitida por mi representada el 28 de agosto de 2024 el cual obra dentro del expediente administrativo y el acapite de pruebas de la presente demanda.

AL HECHO 4; NO ME CONSTA; La entidad COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTÍAS, invitó y motivó al demandante a trasladarse de régimen pensional, el cual, se materializó el

día 1 de septiembre de 1996, toda vez, que corresponde a situaciones ajenas a mí representada, con relación a las circunstancias particulares del momento y adicionalmente son situaciones que debe probar la demandante durante el proceso.

AL HECHO 4: NO ME CONSTA; que suscribió la solicitud de vinculación o traslado al RAIS, sin la presencia física, ni asesoría pertinente del asesor comercial de la administradora del fondo de pensiones y cesantías, ya que, corresponde a situaciones ajenas a mí representada, con relación a las circunstancias particulares del momento y adicionalmente son situaciones que debe probar la demandante durante el proceso.

AL HECHO 5: NO ME CONSTA; lo que asesor de la AFP Colfondos le haya informado a la demandante acerca de las condiciones del traslado, ya que, corresponde a situaciones ajenas a mí representada, con relación a las circunstancias particulares del momento y adicionalmente son situaciones que debe probar la demandante durante el proceso.

AL HECHO 6: NO ME CONSTA; que posteriormente la demandante realizo un traslado horizontal a la AFP PORVENIR S.A a partir del 01 de noviembre del 2002, fondo en el cual permanece afiliada y como cotizante activa, ya que, son situaciones ajenas a mí representada, con relación a las circunstancias particulares del momento y adicionalmente son situaciones que debe probar la demandante durante el proceso.

AL HECHO 7: NO ME CONSTA; que a la demandante no se le haya brindado información completa en su traslado de régimen, pues, son situaciones ajenas a mí representada, con relación a las circunstancias particulares del momento y adicionalmente son situaciones que debe probar la demandante durante el proceso

AL HECHO 8: ES CIERTO; que a la señora ARIAS OSORIO, en representación de su apoderado radico solicitud de ineficacia de la afiliación y nulidad de traslado de régimen pensional, el pasado 25 de junio de 2024; bajo el radicado No. 2024_12876945, tal como obra en el expediente administrativo y acápite de pruebas de la presente demanda.

AL HECHO 9: ES CIERTO; que mi representada negó el traslado y su regreso voluntario al RPM, mediante carta de radicado 2024_12938208, del 13 de julio de 2024 a la demandante, como obra en el expediente administrativo de la parte activa y el acápite de pruebas.

AL HECHO 10: NO ME CONSTA; que la demandante haya radicado solicitud de ineficacia y traslado al RPM ante la AFP PORVENIR S.A., a fin de que entregara documentación relacionada, son situaciones ajenas a mí representada, con relación a las circunstancias particulares del momento y adicionalmente son situaciones que debe probar la demandante durante el proceso.

AL HECHO 11: NO ME CONSTA; que la AFP PORVENIR S.A., haya emitido respuesta parcial a las peticiones del demandante, ya que, son situaciones ajenas a mí representada, con relación a las circunstancias particulares del momento y adicionalmente son situaciones que debe probar la demandante durante el proceso.

AL HECHO 12: NO ME CONSTA; que la demandante haya radicado solicitud de ineficacia de la afiliación ante la AFP COLFONDOS, bajo el radicado No. R11001008420, mucho menos si se obtuvo respuesta de la misma, ya que, son situaciones ajenas a mí representada, con relación a las circunstancias particulares del momento y adicionalmente son situaciones que debe probar la demandante durante el proceso.

1. HECHOS FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO DE LA DEFENSA

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la demanda respecto de mi representada, las cuales carecen de fundamentos legales y en consecuencia solicito se absuelva a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES** de todos y cada uno de los cargos que en su contra se formulan, por las siguientes razones:

El problema jurídico radica en establecer si ¿le asiste derecho a la señora **DIANA ROCIO ARIAS OSORIO** a que se declare la nulidad o ineficacia de afiliación al Régimen de Ahorro Individual?

Sirven de fundamentos en derecho los siguientes fallos:

- Corte Suprema de Justicia- SL 1452 de 2019
- Corte Suprema de Justicia- SENTENCIA SL 373 DE 2021.
- Corte Suprema de Justicia- SL 1688 de 2019
- Corte Suprema de Justicia- SL 39314 de 2008
- Corte Suprema de Justicia- SL 31989 de 2008
- Corte Constitucional- C 086 DE 2016
- Corte Constitucional- C 1024 DE 2004
- Corte Constitucional- C 1025 DE 2007
- Corte Constitucional- C 789 DE 2002
- Corte Constitucional- C 596 de 1997
- Corte Constitucional- SU 130 DE 2013
- Corte Constitucional- SU 062 DE 2010.
- Corte Constitucional- SU 107 DE 2024.

Respecto del caso de la señora **DIANA ROCIO ARIAS OSORIO** identificada con cedula de ciudadanía número 63.352.465, quien pretende; que se declare la nulidad o ineficacia de afiliación al Régimen de Ahorro Individual, este apoderado de manera unánime, recomienda:

NO proponer fórmula conciliatoria, en consideración a lo siguiente:

Al respecto, conforme al 2 de la Ley 797 de 2003, la cual modificó el artículo 13 de la Ley 100 de 1993: “después de un (1) año de vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión”. y tampoco cumple los requisitos señalados en las sentencias SU-062 DE 2010 y SU-130 de 2013.

También se observa que la DEMANDANTE no hizo uso de los derechos de los afiliados, esto es, el retracto, el cual le da al afiliado la posibilidad de dejar sin efecto su elección, ya sea del régimen pensional o de administradora dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual aquél haya manifestado por escrito la correspondiente selección.

Sirven de Fundamentos Jurídicos, los siguientes:

1. **IMPROCEDENCIA DE DECLARATORIA DE NULIDAD O INEFICACIA EN EL CASO PARTICULAR.**

Es de señalar que el traslado de los aportes enunciados anteriormente se realizó con plena voluntad del cotizante y en consecuencia no es procedente declarar la nulidad de la afiliación realizada por la accionante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y condenar a mi representada a recibir los aportes para activar la afiliación al régimen de prima media con prestación definida, teniendo en cuenta que por decisión propia solicitó, suscribiendo los formularios para efectuarlo, **voluntad que se vio ratificada con los más de 25 años que ha realizado cotizaciones** al régimen de ahorro individual con solidaridad. Además, el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, establece la libre escogencia entre regímenes pensionales y también la posibilidad de trasladarse una vez cada cinco años contados a partir de la selección inicial, sin embargo, por razones financieras y de estabilidad en el sistema pensional el artículo 1 del Decreto 3800 de 2003, limitó este derecho cuando al afiliado le faltare 10 años o menos para alcanzar la edad a pensión, salvo los afiliados que tuviera 15 años cotizados a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones (1 de abril de 1994), para quienes se conservó el derecho a regresar al Régimen de Prima Media en cualquier momento, situación que el demandante no cumple para su retorno automático.

Ahora bien, sobre la constitucionalidad de las anteriores restricciones se pronunció la Corte Constitucional en la Sentencia C-1024 de 2004 cuyo contenido reprodujo en lo pertinente en la sentencia C- 062 de 2010, en dichos fallos manifestó:

"El objetivo perseguido con el señalamiento del periodo de carencia en la norma acusada consiste en evitar la descapitalización del fondo común del régimen solidario de prima media, que se produciría si se permitiera que las personas que no han contribuido al fondo común y que por lo mismo no fueron tenidas en consideración en la realización del cálculo actuarial para determinar las sumas que representarían en el futuro el pago de sus pensiones y su reajuste económico, pudiesen trasladarse de régimen cuando estuviesen próximos al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, lo que contribuiría a desfinanciar el sistema y por ende poner en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de cotizantes"

Desde esta perspectiva dice la Corte Constitucional:

"Que dicho régimen se sostiene sobre las cotizaciones efectivamente realizadas en la vida laboral de los afiliados, para que una vez cumplidos los requisitos de edad y semanas puedan obtener una pensión mínima independientemente de las sumas efectivamente cotizadas, permitir que una persona próxima a la edad de pensionarse se beneficie y resulte subsidiada por las cotizaciones de los demás, resulta contrario no solo al concepto constitucional de Equidad (C.P. art 95), sino también al principio de eficiencia pensional, el cual consiste en obtener la mejor utilización económica de los recursos administrativos y financieros disponibles para asegurar el reconocimiento y pago en forma adecuada, oportuna y suficiente de los beneficios a que da derecho el sistema de seguridad social."

Así mismo, revisado el expediente administrativo del demandante, no se observa solicitud alguna concerniente al traslado que hubiera podido solicitar ante COLPENSIONES, o alguna posible solicitud de la información sobre las diferencias entre un régimen y otro con anterioridad al año **2023**, atendiendo a que peticionaba que la afiliación fuera nula, situación que permitió establecer que para la data en la que elevó dicha solicitud ya estaba dentro de la prohibición de la que habla el artículo 2 de la Ley 797 de 2003.

ESTUDIO RESPECTO A LA LEY 2381 DE 2024

Que mediante la Ley 2381 de 2024 se regula el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones, que la misma entro en vigencia el 16 de julio de 2024, estableciendo en su Artículo 76 la oportunidad de traslado, indicando:

"OPORTUNIDAD DE TRASLADO. Las personas que tengan setecientas cincuenta (750) semanas cotizadas, para el caso de las mujeres, y novecientas (900) semanas cotizadas, para el caso de los hombres, y que les falten menos de diez años para tener la edad de pensión, tendrán dos (2) años a partir de la promulgación de la presente ley para trasladarse de régimen respecto de la normatividad anterior, previa la doble asesoría de que trata la Ley 1748 de 2014"

Que respecto al tema se pronunció la entidad mediante comunicación del 22 de agosto de 2024 radicado 2024_16975945 referencia "instrucciones frente a procesos de ineficacia de traslado", señalando:

"(...) el artículo 76 habilitó la ventana u oportunidad de traslado, para que las personas que, por faltarle menos de 10 años para cumplir la edad de vejez, se encontraban imposibilitadas para retornar al RPM administrado por Colpensiones.

La mencionada norma estableció como requisito para beneficiarse de la ventana de traslado, para los hombres, haber cotizado 900 semanas; y para el caso de las mujeres, haber reunido 750 semanas de cotización. La población en esta situación podrá trasladarse a Colpensiones sin importar la edad próxima a pensión.

Ahora bien, es una realidad que la intención legislativa estuvo motivada por la masiva judicialización de conflictos asociados a ineficacia de traslado, a raíz de todos los afiliados al entonces Instituto de Seguros Sociales que se trasladaron a los Fondos Privados del RAIS con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, pero invocaron la ausencia de la debida información y asesoría para conocer las desventajas del cambio de régimen, especialmente, por desconocer la proyección de la mesada pensional en ambos regímenes para tomar una decisión informada.

Por lo tanto, es claro que la reforma pensional propende porque las personas en estas condiciones puedan trasladarse administrativamente al RPM, sin que tengan que iniciar un proceso judicial."

Que en el caso en concreto se debe tener en cuenta que:

1. La demandante la señora **DIANA ROCIO ARIAS OSORIO** se encuentra a menos de 10 años para cumplir el requisito de edad mínima exigida por la Ley, teniendo en cuenta que nació el 12 de octubre de 1968 y que a la fecha de solicitud de traslado esto es, el 25 de junio de 2024, tenía 55 años de edad
2. Que conforme a la documental obrante resulta claro que el demandante no cumple con los requisitos estipulados en el Artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, teniendo en cuenta que ha cotizado más de 750 semanas a la fecha de promulgación de la citada ley y que no tiene la calidad de pensionado; **sin embargo, como bien lo indica la entidad en respuesta emitida a la demandante el mismo no resulta procedente por cuanto no cumple con la condición previa de la doble asesoría para que proceda el traslado.**
3. Que en el evento que un demandante cumpla con lo señalado en la normatividad citada respecto a la oportunidad de traslado, ha determinado la entidad mediante comunicación del 22 de agosto de 2024 radicado 2024_16975945, lo siguiente:

"En caso de que por parte de los Fondos Privados del RAIS se eleve solicitud de terminación de proceso en virtud de lo establecido en el art. 76 de la Ley 2381 de 2024, la misma podrá ser coadyuvada por Colpensiones.

Si los despachos judiciales acceden a la terminación del proceso, por virtud de lo dispuesto en el art. 76 de la Ley 2381 de 2024, tal decisión no es adversa a los intereses litigiosos de la entidad, y, por ende, no debe ser recurrida, salvo que se trate de personas que no cumplen con los requisitos establecidos en la norma en comento a saber:

- i) *Edad: Hombres 52 o más años. Mujeres 47 o más años*
- ii) *Semanas: Hombres 900 semanas de cotización. Mujeres 750 semanas de cotización.*
- iii) *No encontrarse pensionado en el RAIS o no haber recibido devolución de saldos.*

Lo anterior, teniendo en cuenta que el traslado es permitido por la Ley y ya no se trata de una ineficacia de traslado. Razón por la cual, el respectivo retorno al RPM se realizará en las condiciones de un traslado ordinario, y, por ende, no se debe ordenar la devolución de conceptos señalados por la jurisprudencia en caso de que se declare judicialmente la ineficacia de la afiliación al RAIS."

4. Que conforme a lo anterior, considera esta apoderada que en el presente caso no procede el trámite de doble asesoría a la demandante, teniéndose en cuenta además de lo señalado anteriormente, el Decreto 1225 de 2024, por el cual se reglamenta el párrafo transitorio del artículo 12 y los artículos 57, 75 y 76 de la Ley 2381 de 2024, relacionados con las entidades administradoras del componente complementario de ahorro individual y la selección de estas por parte de los afiliados, el régimen de transición y la oportunidad de traslado, respectivamente, indicando el citado decreto, lo siguiente:

*"Que, de conformidad con lo establecido en el párrafo del artículo 2 de la Ley 1748 de 2014, es deber de las administradoras de pensiones garantizar que **los clientes que***

quieran trasladarse entre regímenes pensionales reciban asesoría de representantes de ambos regímenes, como condición previa para que proceda el traslado entre regímenes.

Que para efectos del cómputo de tiempo se deben considerar las semanas efectivamente cotizadas en cualquiera de los Regímenes pensionales contemplados en la Ley 100 de 1993, los aportes realizados a cajas o fondos de la previsión social o el tiempo de servicio debidamente certificado. De igual forma se tendrán en cuenta los aportes a pensión realizados en el exterior de manera voluntaria al Sistema General de Pensiones creado por la Ley 100 de 1993 o en aplicación de los convenios internacionales de la seguridad social suscritos y ratificados por Colombia.

Que, el parágrafo 2 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 establece que se entiende por semana cotizada el período de 7 días calendario, el artículo 18 de la misma ley señala que la cotización "se hará sobre el "salario mensual", y para dicho propósito de manera expresa ordena remitirse a las disposiciones del Código Sustantivo de Trabajo En consecuencia, al hacer la remisión al artículo 134 del Código Sustantivo del Trabajo, la cual redundando sobre los efectos fiscales que debe tener el tiempo efectivamente servido por el trabajador, éste se reflejará en "períodos iguales y vencidos", regla a partir de la cual a todos los trabajadores se remunera sobre la base uniforme de 7 días a la semana, 30 días por mes y 360 días por año, lo que a su vez constituye el baremo, para el cálculo de las prestaciones sociales y los aportes parafiscales que deben efectuarse al sistema de seguridad social, en salud, pensiones y riesgos laborales.

Que, para el conteo de tiempos en materia pensional, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han fijado una línea de pensamiento, conforme a la cual, resulta objetivo y constitucional contar los años de cotización al Sistema de Seguridad Social en Pensiones a razón de 360 días por año.

Que la oportunidad de traslado no resulta aplicable para aquellas personas que se encuentren en una situación jurídica consolidada ante el régimen general de pensiones. Lo anterior de acuerdo con el pronunciamiento de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL373-2021, que asentó un nuevo criterio respecto a la invalidación del traslado de un régimen a otro cuando quien demanda es un pensionado.

Que de acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 15 de la Ley 100 de 1993, adicionado por el artículo 3 de la Ley 797 de 2003, los trabajadores independientes están obligados a cotizar al Sistema General de Pensiones sobre los ingresos efectivamente percibidos por el ejercicio de sus actividades económicas, y adicionalmente, su ingreso base de cotización no podrá ser inferior al salario mínimo y deberá guardar correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos por el afiliado.

Que el Decreto 1296 de 2022, al modificar el artículo 2.2.4.4.3 del Decreto 1833 de 2016, establece la metodología para determinar el valor de la reserva actuarial y el cálculo de los periodos de cotización omitidos, tanto para empleadores como para trabajadores independientes, en relación con su afiliación y vinculación al Sistema General de Pensiones, por lo que con fines de prevención de fraude al Sistema resulta necesario modificar la fórmula para efectuar el cálculo actuarial que deberán pagar los trabajadores independientes en relación con el cálculo de Salario Base.

Que, a junio de 2024, se reportan 25.122 procesos judiciales activos contra Colpensiones con pretensión de declaratoria de nulidad de la ineficacia del traslado entre el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, por lo cual es indispensable ante la nueva regulación establecer las medidas necesarias para finalizar los procesos litigiosos."

5. Que conforme lo anterior, en el presente caso si bien la demandante no cumple con los requisitos estipulados por en el Artículo 76 de la Ley 2381 de 2024; no cumple con la condición previa de doble asesoría, por lo cual no se propone conciliar. Teniendo en cuenta lo anterior y en vista que no se ha emitido un criterio o un concepto definitivo por parte de Colpensiones para el trámite de esta demanda, recomendando no proponer formula

conciliatoria hasta tanto se consoliden o se establezcan lineamientos claros sobre este tema.

2. IMPROCEDENCIA DE REQUERIR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA INEXISTENTE AL MOMENTO DEL TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL REALIZADO POR LA PARTE ACTORA.

Respecto del deber de información que recae en cabeza de las administradoras de pensiones, es preciso recordar que las demandadas no desconocen su existencia desde el año 1993, con el expedición de la ley 100 de 1993 y el del decreto 663 de 1993, sin embargo es de resaltar que dicho deber se intensifica con la expedición de la ley 1328 de 2009, en donde el deber de información se convierte en un deber de asesoría y buen consejo, por lo que no es dable requerir las mismas formalidades en la asesoría previa al traslado desde el momento mismo de la creación del régimen de ahorro individual con solidaridad y darle el mismo alcance que el legislador y la jurisprudencia le han dado con el transcurso del tiempo.

No es razonable ni jurídicamente válido imponer a las administradoras obligaciones y soportes de información no previstos en el ordenamiento jurídico vigente al momento del traslado de régimen, pues tal exigencia desvirtúa el principio de confianza legítima, teniendo en cuenta que el principio de legalidad y el debido proceso, no consisten solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad para interponer recursos, sino que exige, además, como lo expresa el artículo 29 de la Carta, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se juzga.

El juzgamiento de la conducta de los fondos con base en normas inexistentes, no tiene justificación jurídica alguna y viola gravemente el debido proceso de Colpensiones quien sin haber participado en el trámite de traslado es quien debe afrontar la carga de la prestación.

3. DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS Y LAS EXPECTATIVAS LEGITIMAS

Para el caso que nos ocupa debe indicar que según lo señala la sentencia C-596 de 1997

“cuando, en vigencia de la ley que señala tales requisitos, estos llegan a cumplirse, se habla de derecho adquirido en materia de seguridad social. Cuando, por el contrario, durante el término de vigencia de la ley que prescribe tales condiciones, la persona que aspira a la titularidad de ellos está en vía de cumplirlas, se habla de expectativa de derecho”.

De otra parte la Corte Constitucional en Sentencia de Unificación 130 de 2013 indicó que:

“más allá de la tesis jurisprudencial adoptada en algunas decisiones de tutela, que consideran la posibilidad de trasladado “en cualquier tiempo”, del régimen de ahorro individual al régimen de prima media, con beneficio del régimen de transición para todos los beneficiarios de régimen, por edad y por tiempo de servicios, la Corte se aparta de dichos pronunciamientos y se reafirma en el alcance fijado en las sentencias de constitucionalidad, en el sentido de que solo pueden trasladarse del régimen de ahorro individual al régimen de prima media, en cualquier tiempo, conservando los beneficios del régimen de transición, los afiliados con 15 años o más de servicios cotizados a 1º de abril de 1994.

Lo anterior por cuanto, se reitera, las normas que consagran el régimen de transición, así como la pérdida del mismo, y la posibilidad de traslado entre regímenes pensionales con sus correspondientes restricciones, fueron objeto de control constitucional por parte de esta corporación, a través de las Sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, analizadas con detalle en el acápite precedente, que definieron su verdadero sentido y alcance, considerándolas acordes con la Constitución, y al tratarse de decisiones con efectos de cosa juzgada, adquieren un carácter definitivo, incontrovertible e inmutable, de tal manera que sobre ellas no cabe discusión alguna”.

Es claro que en este asunto no estamos frente a derechos adquiridos por lo que debe recordarse que las figuras señaladas tienen consecuencias jurídicas bien distintas: los derechos adquiridos, al tenor del artículo 58 la Carta Política, ya estaba dentro de la prohibición de la que habla el artículo 2 de la Ley 797 de 2003

4. OBLIGACIONES CONTRACTUALES TAMBIÉN RECAEN EN CABEZA DEL AFILIADO COMO CONSUMIDOR FINANCIERO.

No debe desconocerse que el vínculo contractual generado a partir de la selección y afiliación a uno u otro régimen pensional, genera obligaciones reciprocas, tal y como lo establece el artículo 1495 del código civil, en los siguientes términos:

"ARTICULO 1495. DEFINICION DE CONTRATO O CONVENCION. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas."

De esta manera no se puede desconocer que el afiliado también tiene obligaciones para con la administradora de pensiones que elija, tal y como lo ha determinado el decreto 2241 de 2010, que es su artículo 4º enuncia los deberes de los consumidores financieros del Sistema General de Pensiones, dentro de los cuales se resalta:

"1. Informarse adecuadamente de las condiciones del Sistema General de Pensiones, del nuevo Sistema de Administración de Multifondos y de las diferentes modalidades de pensión.

2. Aprovechar los mecanismos de divulgación de información y de capacitación para conocer el funcionamiento del Sistema General de Pensiones y los derechos y obligaciones que les corresponden.

3. Emplear la adecuada atención y cuidado al momento de tomar decisiones, como son entre otras, la afiliación, el traslado de administradora o de régimen, la selección de modalidad de pensión y de entidad aseguradora que le otorgue la renta vitalicia o la elección de tipo de fondo dentro del esquema de "Multifondos", según sea el caso."

Conforme a lo anterior, es evidente que el deber de información se integra, por una parte con la obligación de asesoría y buen consejo que deben suministrar las administradoras de pensiones a los posibles afiliados, pero también con la información que deben adquirir de manera autónoma los consumidores financieros, acerca de las condiciones, modalidades y sistemas que integran los regímenes pensionales, que permita tomar decisiones, con el debido cuidado y atención que merece la decisión por ejemplo de afiliarse, trasladarse o escoger una modalidad particular, acorde a las expectativas pensionales de cada afiliado.

5. ANÁLISIS DE CADA CASO EN PARTICULAR CON MIRAS A EVITAR REGLAS GENERALES Y AUTOMÁTICAS QUE PERMITAN TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL BAJO CUALQUIER CIRCUNSTANCIA – ACLARACIÓN DE VOTO MAGISTRADO RIGOBERTO ECHEVERRY BUENO, SENTENCIA CSJ SL 1452 DE 2019, RAD. 68852.

En atención a los múltiples pronunciamientos que han realizado nuestras altas cortes, en los que se han fijado parámetros para el análisis de las pretensiones tendientes a la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional, no se puede dejar de lado la particularidad de cada caso, que también ha sido objeto de análisis por parte de los órganos de cierre, en el presente asunto, nos encontramos frente a una persona capaz, consiente y con unas calidades académicas y profesionales particularmente altas, que permiten establecer que la decisión que tomo durante la afiliación al RAIS, estuvo precedida de la información necesaria para concluir que el traslado realizado era la opción más viable para sus intereses futuros, en ese entendido, no puede considerarse que factores como la fluctuación en el mercado de trabajo, evolución de los salarios de la parte actora y otras variables que representan mayor o menores réditos, sean razones suficiente para considerar

que no se le suministro toda la información necesaria para predecir las consecuencias en su futuro pensional, así lo expreso el Magistrado Rigoberto Echeverry Bueno en la aclaración de voto que realiza en la Sentencia CSJ SL 1452 de 2019, cuando indica:

"(...) existen otros eventos en los que no es posible visualizar perjuicios inmediatamente derivados de la decisión del traslado, de manera que las presuntas falencias en la información no producen un efecto cierto o por lo menos determinable en ese momento. Ante tales supuestos, el afiliado debe someterse a las condiciones del sistema por el que optó y puede verse beneficiado o perjudicado, en función de factores como su fluctuación en el mercado de trabajo, la evolución de sus salarios y otras variables que bien le pueden acarrear mayores o menores réditos, respecto de las prestaciones que hubiera podido conseguir en otro régimen. Estos casos, en mi criterio, deben quedar abrigados por la decisión del trabajador y su apuesta por la construcción del derecho en determinado régimen, de manera que no pueden generar la ineficacia del traslado (...)

Por otro lado, la conveniencia de pertenecer a un régimen o a otro, resulta clara para los casos que ha estudiado la Corte Constitucional, cuando una persona perdía la transición, o para quienes habían cumplido uno de los dos requisitos dispuestos en la ley para alcanzar la pensión en el régimen de prima media o incluso para quienes tenían una expectativa cercana de acceso a la prestación, y en dichas condiciones no se encuentra el demandante.

Por su parte el Decreto 692 de 1994 en su artículo 11 establece que la selección del régimen pensional implica la aceptación de las condiciones propias de este para acceder a las prestaciones de invalidez, vejez o muerte. (El subrayado es nuestro).

Señala la norma anterior, los requisitos de forma que debe contener el formulario que se debe diligenciar para adelantar el proceso de vinculación con la respectiva administradora. Y finalmente, establece que cuando el afiliado se traslade por primera vez del RPM al RAIS, en el formulario deberá consignarse que la decisión de trasladarse al régimen seleccionado se ha tomado de manera libre, espontánea y sin presiones y además autoriza la norma a que el formulario contenga leyenda impresa en este sentido.

Ahora bien, en el caso de que la falta de información se hubiera basado en que las **AFP PORVENIR S.A. y COLFONDOS S.A** no realizaron una proyección pensional a la señora **DIANA ROCIO ARIAS OSORIO** al momento de su traslado, preciso resulta indicar al despacho, que las proyecciones pensionales no son pruebas útiles para demostrar un eventual vicio en el consentimiento al momento en que decidió su afiliación dentro de las opciones que la ley le daba. Sumado a ello, dicha obligación de emitir por parte de las AFP herramientas financieras o proyecciones pensionales a los potenciales afiliados nació con el Decreto 2071 de 2015, es decir, con posterioridad al traslado del demandante.

Además, el mencionado Decreto en su artículo 2.6.10.4.3. Párrafo 2 establece:

"Párrafo 2º. La proyección de que trata este artículo, proporcionada por la Administradora del Régimen de Ahorro individual con Solidaridad, a través de las herramientas financieras, deberá entenderse como un cálculo estimado de la eventual futura pensión. La Administradora deberá informar al afiliado que la mesada pensional resultante es una mera proyección y no un derecho consolidado, por fundamentarse en una simulación de supuestos futuros probables, pero sin certeza sobre la ocurrencia." (El subrayado es nuestro.)

Ahora bien, como quiera que el monto pensional en el RAIS también depende de variables como el rendimiento financiero de los fondos sujetos al comportamiento fluctuante de la economía, incierto resulta establecer un posible monto que le permitiera en ese momento a el demandante evaluar cuál sería a futuro el régimen más favorable, en esa medida, no se puede afirmar que el supuesto silencio de las **AFP COLFONDOS S.A y PORVENIR S.A.**, en estos puntuales aspectos constituya falta en el deber de información.

6. LA CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA NO PUEDE SER APLICADA EN FORMA GENÉRICA, SIN NINGUNA PONDERACIÓN, Y EN DESIGUALDAD DE LAS PARTES INVOLUCRADAS EN UN PROCESO.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 167 de la ley 1564 de 2012, es evidente que quien afirma la ocurrencia de un hecho, es quien debe soportar probatoriamente la carga que ello genera, de tal forma que la regla general es que corresponde a cada parte probar el supuesto de hecho que exhibe y atendiendo las situaciones particulares del caso, no obstante lo anterior, el juez puede invertir la carga de la prueba exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias.

La carga dinámica e inversión de la prueba al interior de un proceso judicial exige la igualdad entre las partes con parámetros de buena fe y lealtad procesal. Bajo estas circunstancias el principio "quien alega debe probar" cede su lugar al principio "quien puede debe probar". Para determinar quién es el que puede probar dentro de un proceso judicial la Corte Constitucional ha señalado que depende de cada situación particular. Así la sentencia C 086 de 2016 que analizó la constitucionalidad del art. 167 del Código General del Proceso, indicó:

7.4.- En lo concerniente a la configuración de la carga dinámica de la prueba debe decirse que atiende su inspiración teórica, fundada en los pilares de solidaridad, equidad (igualdad real entre las partes), lealtad y buena fe procesal, todos ellos reconocidos en la Carta Política de 1991, donde el principio "quien alega debe probar" cede su lugar al principio "quien puede debe probar". Su ejercicio por parte del juez es, en consecuencia, manifestación de una competencia plenamente legítima bajo el prisma de un Estado Social de Derecho.

En la regulación aprobada por el Legislador este decidió también de manera deliberada y consciente no fijar un catálogo cerrado de episodios en las cuales puede tener cabida la carga dinámica de la prueba. Por el contrario, dejó abierta esa posibilidad al juez, "según las particularidades del caso", para lo cual mencionó solo algunas hipótesis: (i) la posesión de la prueba en una de las partes, (ii) la existencia de circunstancias técnicas especiales, (iii) la previa y directa intervención en los hechos, (iv) el estado de indefensión o de incapacidad de una de las partes, "entre otras circunstancias similares".

Para el caso que nos ocupa, es preciso analizar las particularidades del caso, así:

Hasta el año 2016, los fondos privados cuentan exclusivamente con el consentimiento vertido en el formulario de afiliación, para probar el conocimiento y asentimiento del afiliado respecto del traslado, por cuanto las leyes que surgieron entre el año 1994 y 2016 no exigían nada diferente al documento de afiliación donde constaba la plena intención de pertenecer al Régimen de ahorro individual con solidaridad.

Imponer cargas adicionales a las previstas en las leyes de la época se constituye en una situación de carácter imposible.

Igualmente, si bien existe una intervención de asesoría de la administradora de pensiones que podría generar un vicio en la voluntad del traslado, ello debe demostrarse pues de lo contrario predominarían las conjeturas y suposiciones, y no los hechos debidamente demostrados en el proceso en los que intervino directamente el demandante.

No pueden considerarse a todos los afiliados como una parte débil e indefensa, la misma ley previó distintos deberes en cabeza de los mismos con el fin de que por interés propio se asesoren de la mejor manera. Adicionalmente no pueden desconocerse las situaciones que rodean cada caso y que de alguna manera le permitían al demandante obtener información mínima durante el paso del tiempo. La Corte Constitucional en sentencia T 122 de 2017 ha indicado, en este sentido y en diversas providencias que nadie puede alegar su propia culpa a favor:

"Una persona no es digna de ser oída ni menos pretender el reconocimiento de un bien jurídico a partir de su conducta reprochable. Para la Corte, nadie puede presentarse a la

justicia para pedir la protección de los derechos bajo la conciencia de que su comportamiento no está conforme al derecho y los fines que persigue la misma norma. Este principio no tiene una formulación explícita en el ordenamiento jurídico. No obstante, lo anterior, la Corte Constitucional ha hecho alusión a su naturaleza de regla general del derecho, al derivarse de la aplicación de la analogía iuris. Por ello, cuando el juez aplica dicha regla, se ha señalado que el mismo no hace otra cosa que actuar con fundamento en la legislación."

Con lo señalado hasta ahora, debe considerarse que la carga dinámica de la prueba no puede invertirse de una forma arbitraria y sin considerar los aspectos particulares de cada caso debidamente individualizado, tal y como lo precisó la Corte Constitucional en la citada providencia C 086 de 2016:

"Imponer al juez la obligación de acudir en todos los eventos a la institución de la carga dinámica de la prueba, y no de manera ponderada de acuerdo con las particularidades de cada caso y los principios generales de la Ley 1564 de 2012, significaría alterar la lógica probatoria prevista en el estatuto procesal diseñado por el Legislador, para en su lugar prescindir de las cargas procesales razonables que pueden imponerse a las partes y trasladar esa tarea únicamente al juez"

De tal forma que evitar reglas automáticas que permitan el traslado de régimen pensional bajo cualquier condición y aprovechándose de la imposibilidad que tiene la parte demandada de probar un hecho que ni la legislación ni la jurisprudencia exigían configurar para el momento del traslado, resulta necesario y procedente en el presente asunto, dadas las particularidades del caso.

7. NO ES DABLE ALEGAR IGNORANCIA DE LA LEY, PARA JUSTIFICAR UNA DECISIÓN TOMADA HACE MÁS DE 25 AÑOS.

Por otra parte, observando que la demandante manifiesta que la falta de información también radica en que no se le explicaron las ventajas y desventajas del régimen de ahorro individual, debe precisarse que las características, condiciones y modalidades pensionales propias de este régimen están consignadas en los artículos 59 y siguientes de la ley 100 de 1993, norma que por ser de alcance nacional impone su conocimiento a todos los ciudadanos a partir de su promulgación en los términos del artículo 11 del Código Civil, por tanto no es dable alegar la ignorancia como excusa a voces de lo que prevé el artículo 9 de la Codificación antes citada, para atribuir a la AFP la responsabilidad de haber omitido información al respecto ya que este señalamiento lo hace la ley, máxime cuando el demandante de manera voluntaria suscribió el formulario de afiliación al RAIS.

De otro lado, si el señor juez concluyera que le asiste razón al demandante y ordena el respectivo traslado entre regímenes, debe decirse que para el respectivo traslado de aportes se debe cumplir con lo normado en el artículo 113 de la Ley 100 de 1993, que establece:

"ARTÍCULO 113. TRASLADO DE RÉGIMEN. Cuando los afiliados al Sistema en desarrollo de la presente Ley se trasladen de un régimen a otro se aplicarán las siguientes reglas:

a) Si el traslado se produce del Régimen de Prestación Definida al de Ahorro Individual con Solidaridad, habrá lugar al reconocimiento de bonos pensionales en los términos previstos por los artículos siguientes;

b) Si el traslado se produce del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen de Prestación Definida, se transferirá a este último el saldo de la cuenta individual, incluidos los rendimientos, que se acreditará en términos de semanas cotizadas, de acuerdo con el salario base de cotización"

En consecuencia, de lo antes expuesto, solicito muy respetuosamente al Despacho, desestimar estas pretensiones, absolviendo a mi representada de cada una de ellas.

Finalmente, no puede desconocerse el gran problema que puede generar el traslado indiscriminado de afiliados que, excusándose en presuntas faltas al deber de información de las administradoras de pensiones, pretenden acceder a una prestación en el régimen de prima media con prestación, cuando no han guardado fidelidad al sistema; es importante tener en cuenta el principio de sostenibilidad financiera del sistema Pensional, del cual la CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-242 de 2009. Magistrado Ponente Mauricio González Cuervo, indicó:

"Las reformas a los regímenes pensionales, en particular, garantizan la sostenibilidad financiera del sistema pensional y la financiabilidad de otros potenciales pensionados. Estas finalidades constitucionalmente relevantes obligan a la ponderación entre sacrificios individuales y beneficios al sistema (artículo 48 CP, adicionado por el Acto Legislativo No. 1 de 2005). Ello explica que esta Corte haya puesto de presente que el Legislador no está obligado a sostener en el tiempo las expectativas que tienen las personas, conforme a las Leyes vigentes, en un momento determinado. Su potestad de configuración legislativa le habilita a modificar los regímenes jurídicos en función de nuevas variables, razones de oportunidad o conveniencia, y a otros intereses y circunstancias contingentes que deba priorizar para lograr los fines del Estado Social de Derecho, desde luego, consultando parámetros de justicia y equidad, y con sujeción a criterios de razonabilidad y proporcionalidad"

En igual sentido la Corte Constitucional en la sentencia C-1024 del 2004 cuyo contenido reprodujo en lo pertinente en la sentencia C-062 del año 2010; la Corte indicó:

"(...)el objetivo perseguido con el señalamiento del período de carencia en la norma acusada, consiste en evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, que se produciría si se permitiera que las personas que no han contribuido al fondo común y que, por lo mismo, no fueron tenidas en consideración en la realización del cálculo actuarial para determinar las sumas que representarán en el futuro el pago de sus pensiones y su reajuste periódico; pudiesen trasladarse de régimen, cuando llegasen a estar próximos al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, lo que contribuiría a desfinanciar el sistema y, por ende, a poner en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de cotizantes (...)"

Desde esta perspectiva si dicho régimen se sostiene sobre las cotizaciones efectivamente realizadas en la vida laboral de los afiliados, para que una vez cumplidos los requisitos de edad y número de semanas, puedan obtener una pensión mínima independientemente de las sumas efectivamente cotizadas. Permitir que una persona próxima a la edad de pensionarse se beneficie y resulte subsidiada por las cotizaciones de los demás, resulta contrario no sólo al concepto constitucional de equidad (C.P. art. 95), sino también al principio de eficiencia pensional, cuyo propósito consiste en obtener la mejor utilización económica de los recursos administrativos y financieros disponibles para asegurar el reconocimiento y pago en forma adecuada, oportuna y suficiente de los beneficios a que da derecho la seguridad social (...)"

Aunado a lo anterior, es de recordar que el régimen de ahorro individual y el régimen de prima media con prestación definida, tienen diferente forma de distribución del monto de los aportes, pues recordemos que mientras en el RPM el 13% de los aportes son destinados a financiación de pensión de vejez y reservas y el 3% a pensión de sobrevivientes e invalidez y gastos de administración, en el régimen de ahorro individual con solidaridad tan solo el 11.5% del aporte va dirigido a la cuenta de ahorro individual con solidaridad, el 3% para seguros previsionales y gastos de administración y 1.5% al fondo de garantía de pensión mínima, por lo que el eventual traslado de lo consignado en la cuenta de ahorro individual con solidaridad, no corresponder porcentualmente a lo que en el régimen de prima media se destina para la financiación, en este caso de la pensión de vejez.

De igual manera es evidente que han pasado muchos años en los cuales el demandante no contribuyó con el fondo común que financia las pensiones de las personas que han guardado fidelidad al régimen de prima media con prestación definida, ello conlleva al detrimento patrimonial que pretende evitar el principio de sostenibilidad financiera, pues basta con citar

el artículo 20 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 7 de la ley 797 de 2003, que a su vez incremento el valor del aporte mediante decreto 4981 de 2007 al 16% para aporte a pensiones, en los cuales se estipulo que:

"ARTÍCULO 7o. El artículo 20 de la Ley 100 de 1993 quedará así:

Artículo 20. Monto de las cotizaciones. La tasa de cotización continuará en el 13.5% del ingreso base de cotización.

En el régimen de prima media con prestación definida el 10.5% del ingreso base de cotización se destinará a financiar la pensión de vejez y la constitución de reservas para tal efecto. El 3% restante sobre el ingreso base de cotización se destinará a financiar los gastos de administración y la pensión de invalidez y sobrevivientes.

En el régimen de ahorro individual con solidaridad el 10% del ingreso base de cotización se destinará a las cuentas individuales de ahorro pensional. Un 0.5% del ingreso base de cotización se destinará al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y el 3% restante se destinará a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes.

(...) El incremento de la cotización se destinará en el régimen de prima media al pago de pensiones y a la capitalización de reservas pensionales"

El incremento se dio a través del decreto 4982 de 2007 que estipulo:

"Artículo 1°. Cotización al Sistema General de Pensiones. A partir del 1° de enero del año 2008, la tasa de cotización al Sistema General de Pensiones será del 16% del ingreso base de cotización"

Conforme a lo anterior, es evidente que el eventual traslado de régimen pensional del demandante, afecta significativamente el sistema financiero del RPM, teniendo en cuenta la variación porcentual de la destinación del aporte en ambos regímenes pensionales, la falta de contribución del demandante al fondo común que financia las pensiones en el RPM y la carga que generaría en los demás afiliados soportes un eventual reconocimiento pensional a favor del demandante, quien no ha construido un derecho pensional en el régimen de prima media.

2. LEGISLACION APLICABLE AL CASO

1. Artículo 2 DE LA LEY 797 DE 2003.

Es necesario precisar para el caso que nos ocupa, que el demandante se encuentra inmerso en una prohibición preceptuada en el artículo en mención, mismo que reza lo siguiente:

"Se modifican los literales a), e), i), del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y se adiciona dicho artículo con los literales l), m), n), o) y p), todos los cuales quedarán así:

Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez"

Revisando los hechos de la demanda, se tiene que la demandante, a la fecha de solicitud de traslado del RAIS al RPM, ya se encontraba inmersa en la prohibición de que trata el artículo 2 de la ley 797 de 2003 por estar a menos de 10 años de cumplir la edad mínima exigida por la Ley para acceder a esta prestación, por lo que se enmarca su situación en la

norma antes citada, de allí que COLPENSIONES, actuando bajo los preceptos normativos, negó el pretendido traslado.

2. **ARTÍCULO 113 DEL LA LEY 100 DE 1993.**

"Cuando los afiliados al Sistema en desarrollo de la presente Ley se trasladen de un régimen a otro se aplicarán las siguientes reglas:

a) Si el traslado se produce del Régimen de Prestación Definida al de Ahorro Individual con Solidaridad, habrá lugar al reconocimiento de bonos pensionales en los términos previstos por los artículos siguientes;

b) Si el traslado se produce del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen de Prestación Definida, se transferirá a este último el saldo de la cuenta individual, incluidos los rendimientos, que se acreditará en términos de semanas cotizadas, de acuerdo con el salario base de cotización".

De la norma en cita se desprende que no basta con trasladar los aportes realizados efectivamente cotizados al Fondo Privado de Pensiones, sino que la AFP debe emitir el respectivo bono pensional donde se incluya el saldo de la cuenta individual y los rendimientos, para luego si realizar la respectiva aprobación del traslado de régimen y de aportes.

3. **SENTENCIA C-1024 de 2004.**

En el presente caso, la medida prevista en la norma acusada, conforme a la cual el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, resulta razonable y proporcional, a partir de la existencia de un objetivo adecuado y necesario, cuya validez constitucional no admite duda alguna. En efecto, el objetivo perseguido por la disposición demandada consiste en evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, y simultáneamente, defender la equidad en el reconocimiento de las pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, pues se aparta del valor material de la justicia, que personas que no han contribuido a obtener una alta rentabilidad de los fondos de pensiones, puedan resultar finalmente beneficiadas del riesgo asumido por otros.

4. **INCISO 4° ARTÍCULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993 / SENTENCIA C 789 DE 2002 y ARTICULO 3° DEL DECRETO 3800 DE 2003.**

La ley 100 de 1993 en su artículo 36, estableció el régimen de transición para aquellas personas que a la entrada en vigencia de la citada ley, esto es 1 de abril de 1994, acreditaran bien sea el cumplimiento de la edad, 35 años para las mujeres y 40 años para los hombres o 15 años de servicio o cotizaciones. Sin embargo, en el inciso 4° del artículo en mención, se estableció la inaplicabilidad del régimen de transición para quienes se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad. Posteriormente, este inciso fue declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional en sentencia de fecha 24 de septiembre de 2002, bajo el radicado C789 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil, estableciendo que el régimen de transición no será aplicable a quienes se trasladen al régimen de ahorro individual, con excepción de quienes acrediten haber tenido 15 años o más de servicios cotizados al 1 de abril de 1994, requisito que ha sido reiterado en sentencia C 1024 de 2004 y SU 062 de 2010.

5. **ARTÍCULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993:**

"Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o

cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen (...)"

6. LEY 71 DE 1988

"A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.

El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las entidades involucradas"

7. DECRETO 3800 DE 2003.

"Artículo 3°. Aplicación del Régimen de Transición. En el evento en que una persona que a 1° de abril de 1994 tenía quince (15) o más años de servicios prestados o semanas cotizadas, que hubiere seleccionado el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, decida trasladarse al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, le será aplicable el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo cual podrán pensionarse de acuerdo con el régimen anterior al que estuvieren afiliados a dicha fecha, cuando reúnan las condiciones exigidas para tener derecho a la pensión de vejez, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: a) Al cambiarse nuevamente al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, se traslade a él el saldo de la cuenta de ahorro individual del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, y b) Dicho saldo no sea inferior al monto total del aporte legal para el riesgo de vejez, correspondiente en caso de que hubieren permanecido en el Régimen de Prima Media, incluyendo los rendimientos que se hubieran obtenido en este último. En tal evento, el tiempo cotizado en el Régimen de Ahorro Individual le será computado al del Régimen de Prima Media con Prestación Definida. Para efectos de establecer el monto del ahorro de que trata el literal b) anterior no se tendrá en cuenta el valor del bono pensional (...)"

8. ARTÍCULOS 9, 11, 1509 Y 1754 DEL CÓDIGO CIVIL:

Ante las manifestaciones que sirvieron de sustento al contestar las pretensiones de la demanda, es claro evidenciar que estamos en presencia de una negligencia por parte del demandante, teniendo en cuenta que desconoce los preceptos normativos que contiene la Ley de seguridad social (Ley 100 de 1993), al indicar que las AFP son las que tienen la obligación de informar sobre ventajas y desventajas del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al cual se encuentra válidamente afiliado a la fecha. Y es que esta situación configura un desconocimiento de la norma en mención, misma que a voces del artículo 9 de la Codificación Civil, no sirve de excusa para declararla absuelta de cualquier culpa o error que haya conocido, máxime cuando en la Ley 100 de 1993, se evidencia la explicación y funcionamiento de los regímenes existentes en nuestro sistema de seguridad social.

Y es que el pilar de la presente acción es la omisión de las AFP demandadas, por cuanto estas, se hicieron presente en la antesala de la afiliación a la presente data en la que el demandante aún se encuentra afiliado, interregno en el cual, debe de conocer por su propia cuenta la norma que regula el régimen para el cual efectúa sus aportes, pues el artículo 11 del Código Civil es claro al manifestar que los efectos de la ley se surten a partir de la promulgación de estos, lo que hace imperioso el conocimiento de la norma que regula los derechos, deberes y obligaciones como afiliado de un régimen, el cual, sin lugar a equívocos regula el artículo 59 y s.s. de la ley 100 de 1993.

En ese orden de ideas su señoría, en el presente asunto no se puede configurar un vicio del consentimiento, por cuanto se configura un ERROR SOBRE UN PUNTO DE DERECHO, el cual no vicia el consentimiento de las partes, al ser claro el contenido de la ley que regula el funcionamiento de los regímenes pensionales existentes.

No se puede pasar por alto que, al suscribir un formulario de afiliación, medió el consentimiento de la parte contratante, situación que puede declararse nula al evidenciarse un vicio en el ya mencionado consentimiento, mismo que puede ser saneado con el paso del tiempo tal como lo preceptúa el artículo 1754 del Código Civil:

"RATIFICACIÓN TÁCITA: La ratificación tácita es la ejecución voluntaria de la obligación contratada".

Vemos entonces claramente, como el Código Civil regula el saneamiento de la nulidad, que para el caso de marras se dio con la ratificación tácita del demandante al permanecer al RAIS, efectuando los aportes a los riesgos de vejez, invalidez y muerte.

9. SL 373 DE 2021

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL 373-2021, moderó el precedente respecto a la posibilidad de materializar los efectos de la ineficacia, esto es, retrotraer las cosas al estado anterior, tratándose de demandantes que ya tienen una situación jurídica consolidada o adquirieron el estatus de pensionados en el régimen de ahorro individual.

A este respecto, el Alto Tribunal de la especialidad laboral reflexionó que, al haberse adquirido la calidad de pensionado, se produce la imposibilidad de retornar al estatus quo ante, es decir, tal condición no puede deshacerse o desaparecerse del plano jurídico, pues ello conllevaría a:

"disfuncionalidades que afectaría a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto."

Porque no es posible revertir ciertos efectos económicos como el deterioro que sufre el capital que ya ha sido objeto de pago a través de mecanismos de financiación como los bonos pensionales y las cuotas partes de entidades contribuyentes, como consecuencia ineludible del pago de mesadas pensionales. En efecto, es irreparable la pérdida de integridad del músculo financiero con que se respalda el pago de la prestación, por lo que forzar a través de una ficción jurídica la vuelta al estado anterior en que se encontraba las cosas, va en detrimento de los recursos de la Seguridad Social, bien sea que provengan de la Nación y/o demás entidades que deben contribuir al financiamiento del pasivo pensional.

Sumado a lo anterior, se torna inviable la realización de los efectos de la ineficacia, por cuanto no es posible cesar los efectos jurídicos de las operaciones, contratos y actos que involucran a terceros como aseguradoras, entidades oficiales e inversiones, que según la modalidad pensional en que se encuentre el actual pensionado, hayan concurrido en la administración y gestión del riesgo financiero, entre otras muchas problemáticas de orden financiero, que ocasionarían un déficit económico entre los actores del Sistema que han confluído en la gestión de los recursos a través de relaciones jurídicas válidamente suscitadas en el mundo jurídico del Sistema General de Pensiones, en cumplimiento de obligaciones y deberes contractuales que ya se encuentran consumados y perfeccionados con las consecuencias de orden legal y financiero que ello acarrea.

En conclusión, no procede la declaratoria de ineficacia y/o nulidad de traslado de régimen pensional, realizado por la señora **DIANA ROCIO ARIAS OSORIO**, la demandante no demostró que verdaderamente haya sido obligado a pertenecer a dicho fondo en razón a que tuvo un lapso de tiempo pertinente para solicitar asesoría de manera virtual, telefónica o presencial, actualizar sus datos como dirección, teléfono, beneficiarios y tuvo siempre

disposición por parte de las administradoras de pensión recibir su respectiva asesoría, tampoco fue tachado de falso el formulario de afiliación con la AFP razón por el cual el despacho por simple costumbre no puede ir dictando fallo condenatorio afectando la aplicación de las normas y la seguridad jurídica que tienen como jueces de la república y retornar nuevamente recibirlo al RPM generando un impacto económico por no guardar fidelidad en el sistema de RPM.

Razones por las cuales, no debe accederse a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, deberá **Absolverse**, a Colpensiones de todas aquellas incoadas en su contra.

PRONUNCIAMIENTO EXPRESO A LAS PRETENSIONES

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones tanto declarativas como condenatorias del demandante y en consecuencia solicito se absuelva a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES** de todas y cada una de las peticiones que en su contra se formulan, por las razones que se esgrimen en los acápites de la oposición, hechos y razones de la defensa y fundamentos de las excepciones que se enuncian a continuación y se condene al demandante al pago de las costas incluyendo agencias en derecho en los términos del numeral 1 del artículo 365 y 366 del C.G.P. en aplicación analógica prevista por el Artículo 145 del C.P.T.S.S.

A LA PRETENSIÓN 1: ME OPONGO, Que se declare que es NULO E INEFICAZ el traslado efectuado de **DIANA ROCIO ARIAS OSORIO** del régimen de prima media con prestación definida administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por la(s) demandada(s) PORVENIR S.A. y COLFONDOS S.A toda vez que la afiliación se realizó con plena voluntad del cotizante, quien por decisión propia solicitó suscribir el formulario de afiliación a dicha AFP, cumpliendo con los requisitos establecidos por la Sentencia C-1024 de 2004, y en la sentencia C-789 de 2002, basadas en el artículo 2 de Ley 797 de 2003 que modificó el literal “e” del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que nos habla de la posibilidad de traslado de los aportes pensionales entre regímenes, expresando lo siguiente:

"Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez"

De acuerdo a lo anterior, es de precisar que la demandante, solicitó nulidad de traslado de régimen pensional y mesada pensional a COLPENSIONES encontrándose afiliado al RAIS, tiempo para el cual se encontraba en la prohibición establecida en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, por lo que solicitar el traslado entre regímenes en este momento es ilegal e improcedente, lo que imposibilita a mi representada reactivar la afiliación y aceptar el traslado de los aportes realizados por el demandante en el régimen de ahorro individual con solidaridad.

A LA PRETENSION 2: ME OPONGO, En consecuencia, se declare que la demandante, **DIANA ROCIO ARIAS OSORIO** se encuentra válidamente afiliado(a) al régimen de prima media con prestación definida administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y que nunca hubo solución de continuidad en su afiliación., toda vez que la afiliación se realizó con plena voluntad del cotizante, quien por decisión propia solicitó suscribir el formulario de afiliación a dicha AFP, cumpliendo con los requisitos establecidos por la Sentencia C-1024 de 2004, y en la sentencia C-789 de 2002, basadas en el artículo 2 de Ley 797 de 2003 que modificó el literal “e” del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que nos habla de la posibilidad de traslado de los aportes pensionales entre regímenes, expresando lo siguiente:

"Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen

por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez”

De acuerdo a lo anterior, es de precisar que la demandante, solicitó nulidad de traslado de régimen pensional y mesada pensional a COLPENSIONES encontrándose afiliado al RAIS, tiempo para el cual se encontraba en la prohibición establecida en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, por lo que solicitar el traslado entre regímenes en este momento es ilegal e improcedente, lo que imposibilita a mi representada reactivar la afiliación y aceptar el traslado de los aportes realizados por el demandante en el régimen de ahorro individual con solidaridad.

A LA PRETENSION 3: ME OPONGO, Que Se condene a la demandada a trasladar a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones el monto total de dinero recibido como consecuencia de la afiliación o traslado de la señora **DIANA ROCIO ARIAS OSORIO** incluyendo aportes (obligatorios y voluntarios) , bonos pensionales , rendimientos sin lugar a deducir ningún valor por concepto de gastos de administración , valores destinados al fondo de garantía de pensión mínima o por cualquier otro concepto., toda vez que la afiliación se realizó con plena voluntad de la cotizante, quien por decisión propia solicitó suscribir el formulario de afiliación a dicha AFP, cumpliendo con los requisitos establecidos por la Sentencia C-1024 de 2004, y en la sentencia C-789 de 2002, basadas en el artículo 2 de Ley 797 de 2003 que modificó el literal “e” del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que nos habla de la posibilidad de traslado de los aportes pensionales entre regímenes, expresando lo siguiente:

“Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez”

De acuerdo a lo anterior, es de precisar que la demandante, solicitó nulidad de traslado de régimen pensional y mesada pensional a COLPENSIONES encontrándose afiliado al RAIS, tiempo para el cual se encontraba en la prohibición establecida en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, por lo que solicitar el traslado entre regímenes en este momento es ilegal e improcedente, lo que imposibilita a mi representada reactivar la afiliación y aceptar el traslado de los aportes realizados por el demandante en el régimen de ahorro individual con solidaridad.

A LA PRETENSION 3: ME OPONGO, Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones a activar la afiliación de la demandante para continuar haciendo sus aportes pensionales o bien para efectos de reconocimiento pensional toda vez que la afiliación se realizó con plena voluntad del cotizante, quien por decisión propia solicitó suscribir el formulario de afiliación a dicha AFP, cumpliendo con los requisitos establecidos por la Sentencia C-1024 de 2004, y en la sentencia C-789 de 2002, basadas en el artículo 2 de Ley 797 de 2003 que modificó el literal “e” del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que nos habla de la posibilidad de traslado de los aportes pensionales entre regímenes, expresando lo siguiente:

“Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez”

De acuerdo a lo anterior, es de precisar que la demandante, solicitó nulidad de traslado de régimen pensional y mesada pensional a COLPENSIONES encontrándose afiliado al RAIS, tiempo para el cual se encontraba en la prohibición establecida en el artículo 2 de la Ley

797 de 2003, por lo que solicitar el traslado entre regímenes en este momento es ilegal e improcedente, lo que imposibilita a mi representada reactivar la afiliación y aceptar el traslado de los aportes realizados por el demandante en el régimen de ahorro individual con solidaridad.

A LA PRETENSIÓN 5: ME OPONGO; Las demás declaraciones y condenas EXTRA Y ULTRA PETITA. Entendiendo que mi representada la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones ha realizado sus actuaciones de buena fe y según le indica la ley de la República de Colombia y así mismo se presumen las actuaciones.

A LA PRETENSIÓN 6: ME OPONGO, Que En caso de oposición de las demandadas se le condene AL PAGO DE LOS GASTOS PROCESALES y agencias en derecho., toda vez que resulta ilógico e inconstitucional pretender que al generar oposición se le condene a los demandados al pago de costas, teniendo en cuenta que es una facultad que se otorga en relación al derecho a la defensa consagrada en la Constitución Política De Colombia, siendo esta pretensión elaborada por el apoderado de la parte actora, un desconocimiento hacia el derecho sustancial.

EXCEPCIONES PERENTORIAS:

1. EL ERROR SOBRE UN PUNTO DE DERECHO NO VICIA EL CONSENTIMIENTO

Encuentra vocación de prosperidad esta pretensión por cuanto el artículo 1509 de la codificación Civil manifiesta que el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento, y es claro que la demandante en los términos de los artículos 9 y 11 ibídem al trasladarse al RAIS tenía la obligación de conocer la ley 100 de 1993, pues dentro de este cuerpo normativo se establece de manera clara y precisa el funcionamiento de dicho régimen pensional así como también el de Prima Media con prestación definida, para que por su propio raciocinio tomara la decisión de permanecer afiliado al ISS o trasladar sus aportes, por lo tanto no puede decir que hubo un vicio del consentimiento, en especial cuando se trata de un supuesto ocultamiento de la información, pues si bien la H. Corte Constitucional ha indicado que las Administradoras de Fondo de Pensiones tienen el deber del buen consejo, lo cierto es que el afiliado o quien pretende ser afiliado no puede desconocer la norma ya citada pues la misma es obligatorio conocimiento para su aplicación y la demandante se escuda en un desconocimiento de la norma que los términos del artículo 9 del Código Civil no la exime de responsabilidad alguna tanto de sus derechos como de sus obligaciones.

2. PRESCRIPCIÓN:

Sin que de ninguna manera se entienda reconocimiento de los hechos y pretensiones aducidas por la demandante, se propone esta excepción correspondiente a cualquier derecho que eventualmente se hubiese causado a favor de la demandante y que de conformidad con las normas legales y con las probanzas del juicio, quedaran cobijado por el fenómeno jurídico de la prescripción y la caducidad. Prescripción establecida en el art 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

3. PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS:

Las resoluciones o actos administrativos proferidos por la entidad que represento mediante los cuales resolvieron negativamente las solicitudes del accionante se encuentran amparadas legalmente con base en la documentación que reposa en la entidad, una vez llenos los requisitos para su formación adquieren fuerza obligatoria y gozan de presunción de legitimidad.

4. COBRO DE LO NO DEBIDO:

Por cuanto mi representada no adeuda derecho alguno al demandante por los conceptos aquí demandados, en razón a que la demandante no se encuentra afiliada al Régimen de prima media con prestación definida.

5. BUENA FE:

La entidad que represento siempre ha actuado dentro de los parámetros legales y Constitucionales, amparado en el principio de la Buena Fe tanto de esta entidad como de las entidades o personas que acuden a ella en calidad de usuarios o afiliados y en desarrollo de lo expresado en nuestra carta magna artículo 83 que indica que:

"las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas".

6. INEXISTENCIA DEL DERECHO

En razón que el traslado se realizó con plena voluntad del cotizante y en consecuencia no es procedente declarar la nulidad de la afiliación realizada por la accionante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y condenar a mi representada a recibir los aportes para activar la afiliación al régimen de prima media con prestación definida, teniendo en cuenta que por decisión propia solicitó su afiliación al RAIS, igualmente la actora se encuentra inmersa en la prohibición legal establecida en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003 para trasladarse de régimen

7. INNOMINADA O GENÉRICA:

Solicito al señor Juez que si encuentra probados hechos que constituyan una excepción, se sirva reconocerla de oficio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 281 del C.G.P aplicado por analogía según lo dispuesto por el artículo 145 del CPTSS.

NO PROCEDENCIA AL PAGO DE COSTAS EN INSTITUCIONES ADMINISTRADORAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ORDEN PÚBLICO

Sin que de manera alguna pueda considerarse aceptación de los hechos y pretensiones de la demanda, se solicita al Despacho, que, bajo los siguientes parámetros legales, que permiten al fallador de instancia abstenerse de esta condena por las razones y fundamentos de derecho que relaciono así:

En primer lugar, solicito la aplicación del Artículo 48 de la Constitución Política que prescribe:

"Artículo 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley.

La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley.

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella.

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante.

En este punto resalto el inciso 4 de este artículo en el que se refiere que no se podrán destinar los recursos de mí representada para fines diferentes a ella, por lo cual es dable interpretar, que el pago de Costas y agencias en derecho serian contrarios a esta preceptiva constitucional.

Ahora bien, el legislador en el artículo 365 del C.G.P en su numeral 5, otorgó a los jueces, la posibilidad de no imponer las costas procesales en casos en que prosperen parcialmente las pretensiones como se observa de la siguiente cita:

"Artículo 365. Condena en costas.

En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

(...)

En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión"

Ahora bien, teniendo en cuenta la realidad de la jurisdicción ordinaria laboral, los procesos Ejecutivos en contra de mi representada, se basan en el pago de costas, por lo que, la no condena de estas evitaría la congestión judicial, salvaguardando principios de sostenibilidad financiera del sistema pensional, amparados bajo el principio de legalidad.

PETICIÓN ESPECIAL

Sin el ánimo de aceptar alguno de los supuestos planteados en la demanda, solicito al despacho que de no acceder a los planteamientos de la defensa y ante la eventual declaratoria de nulidad y/o ineficacia y condena de aceptar la afiliación del demandante en el régimen de prima media con prestación definida sin solución de continuidad, dicha condena este supeditada al traslado efectivo de la totalidad de valores consignados en la cuenta de ahorro individual con solidaridad del demandante, así como los dineros destinados a seguros previsionales, gastos de administración, rendimientos, fondo de garantía de pensión mínima y fondo de solidaridad pensional de aplicar al caso de las AFP PORVENIR, COLFONDOS S.A y cualquier otro fondo donde estuvo afiliado la demandante y que fueron suprimidos o fusionados con las AFP mencionadas.

Lo anterior teniendo en cuenta que los derechos pensionales que pueda llegar a adquirir el demandante en el régimen de prima media con prestación definida, deben ser consecuencia del traslado efectivo de los aportes del demandante a Colpensiones, pues de no ser así y de obligarse a la entidad que represento a reconocer cualquier tipo de derecho sin contarse con los aportes realizados por el demandante a la administradora en la que estuvo afiliado en el régimen de ahorro individual con solidaridad, generaría un impacto en el sistema financiero de Colpensiones, es por ello que solicito que de ser adverso a los intereses de mi representada, en el fallo se incluya la obligación de aceptar el traslado del demandante una vez se haga el traslado efectivo de los aportes realizados en el régimen de ahorro individual con solidaridad.

MEDIOS DE PRUEBA

Solicito se tengan, decreten y practiquen como medios de prueba de las excepciones propuestas las siguientes:

1. DOCUMENTALES:

Copia del expediente administrativo de la parte demandante **DIANA ROCIO ARIAS OSORIO** e historia laboral

2. INTERROGATORIO DE PARTE:

Solicito se cite a la parte demandante **DIANA ROCIO ARIAS OSORIO** para rendir interrogatorio de parte que formulare en la hora fecha establecidas por su despacho, para probar la inexistencia de falta de información o configuración de vicios en el consentimiento.

3. OFICIOS O EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS:

Conforme al artículo 265 del Código general del Proceso solicito se oficie o se ordene a la AFP PORVENIR S.A. con el fin que exhiba y allegue las siguientes certificaciones:

1. Certificación donde se evidencie el total de los descuentos por concepto de gastos de administración realizados mes a mes de la cuenta de ahorro individual de la demandante durante su afiliación.
2. Certificación donde se evidencien todos los contratos con su respectivo valor de los seguros provisionales realizados por la AFP con las aseguradoras, para cubrir las contingencias de invalidez, vejez y muerte y cualquier otro riesgo que generó durante su afiliación.
3. Certificación donde se evidencia el valor del bono pensional si lo hubiere a favor de la parte actora durante su afiliación.
4. Certificación donde se evidencie el total de los valores consignados mes a mes al fondo de garantía de pensión mínima durante su afiliación.
5. Certificación donde se evidencie el total de los valores consignados mes a mes al fondo de solidaridad pensional durante su afiliación.
6. Certificación donde se evidencia el valor de los rendimientos pensionales del demandante mes a mes durante su afiliación.
7. Certificación donde se evidencia el valor de los rendimientos pensionales del demandante mes a mes durante su afiliación.

Lo anterior con el fin de determinar los valores exactos que han sido descontados de la cuenta de ahorro individual del afiliado, poder tasar efectivamente la cuantía de la presente demanda, igualmente son necesarios en caso que se profiera sentencia condenatoria con el fin de tener exacta claridad de los valores que debe recibir mi representada y sobre ellos poder liquidar una posible indexación a favor de Colpensiones tal como se pide en el capítulo 8, petición especial, de la presente contestación.

De no ser así y de obligarse a la entidad que represento a reconocer cualquier tipo de derecho sin contarse con los aportes realizados por el demandante a la administradora en la que estuvo afiliado en el régimen de ahorro individual con solidaridad, generaría un impacto en el sistema financiero de Colpensiones.

4. OTRAS PRUEBAS OFICIOSAS

Las que el señor Juez considere decretar para obtener la certeza jurídica suficiente al momento de proferir Sentencia, para lo cual ruego se de aplicación al inciso final del artículo 170 del C.G.P, que reza:

"Las pruebas decretadas de oficio estarán sujetas a la contradicción de las partes"

2. SOLICITUD CONDENA EN COSTAS

Solicito al Señor Juez, en nombre de mi poderdante, que de ser negadas las pretensiones y condenas y probadas las excepciones de la demanda, la parte actora sea condenada al pago de las costas y agencias en derecho a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES conforme a lo establecido en el artículo 365 del Código General del Proceso.

Además de lo anterior, en el evento de prosperar parcialmente las excepciones propuestas solicito respetuosamente tenga en cuenta al fallar, el numeral 5° del artículo 365 del Código General del Proceso, el cual expresa:

"En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión."

ANEXOS

1.1. Escritura pública No. 44 del 10/01/2025 de la Notaria Once (11) del Círculo de Bogotá mediante la cual la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones le otorga facultades de representación judicial a la firma BUFETE DE ABOGADOS EXPERTOS S.A.S B.A.E, bajo el NIT 901 286 009 1, la cual se encuentra representada legalmente por la Abogada JAHNNIK INGRID WEIMANNS SANCLEMENTE.

1.2. Sustitución de poder otorgada por la JAHNNIK INGRID WEIMANNS SANCLEMENTE para actuar en el proceso de la referencia.

NOTIFICACIONES

El demandante en la dirección aportada al proceso.

Mi poderdante, en la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, carrera 10 No. 72 – 33 torre B piso 11 Bogotá y en el correo electrónico notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co, baenotificacionesjudiciales@gmail.com

El suscrito apoderado judicial en la secretaria de su Despacho y en el correo electrónico defensaj04laboralbae@gmail.com

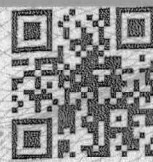
Cordialmente,



LUIS ALBERTO ARIZA CASTELLANOS
C.C. 1.030.589.841 de Bogotá
T.P. 418.875 del C.S.J.

cadena.

República de Colombia



Aa097118768

1

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: 44

CUARENTA Y CUATRO

FECHA: DIEZ (10) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025).

OTORGADA EN LA NOTARIA ONCE (11) DE CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

CLASE DE ACTO: PODER GENERAL.

PODERDANTE:

Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES EICE. NIT. 900.336.004-7

APODERADO:

BAE BUFETE DE ABOGADOS EXPERTOS S.A.S NIT. 901.286.009-1

En la Ciudad de Bogotá, Distrito Capital, República de Colombia, a los diez (10) días del mes de Enero del año dos mil veinticinco (2.025), ante el Despacho de la Notaría Once (11) del Círculo de Bogotá D.C., cuyo Notario Encargado es el Doctor NELSON JAIME SANCHEZ GARCIA, de acuerdo con la resolución No.13922 del 13 de Diciembre de 2024, expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro, se otorgó Escritura Pública que se consigna en los siguientes términos:

Compareció con minuta escritura **DIEGO ALEJANDRO URREGO ESCOBAR**, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, identificado con cédula de ciudadanía número 79.983.390 expedida en Bogotá D.C., de estado civil casado con sociedad conyugal vigente, con domicilio en Bogotá D.C. en su condición de Representante Legal Suplente de la **Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, EICE** con NIT. 900.336.004-7, calidad que acredita el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, quien manifestó que en aplicación de los artículos 440 y 832 del Código de Comercio; el artículo 2142 del Código Civil y la Circular básica Jurídica Capítulo III Título I Parte 1 de la Superintendencia Financiera de Colombia, confiere poder general, amplio y suficiente a **BAE BUFETE DE ABOGADOS EXPERTOS S.A.S.** con NIT. 901.286.009-1, en nombre y representación de la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, EICE, con NIT. 900.336.004-7, en los siguientes términos:

CLÁUSULA PRIMERA. – Otorgo por el presente Instrumento público **PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE** a partir de la suscripción de la presente escritura pública a **BAE BUFETE DE ABOGADOS EXPERTOS S.A.S.** con NIT.



Aa097118768

Nelson J. Sanchez Garcia
NOTARIO ONCE (E) DEL
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

11393BASANKYVY29

18-01-24

cadena. ite-gp-mss-10



Ca515020861

2

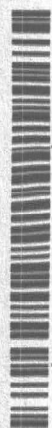
901.286.009-1, para que ejerza la representación judicial y extrajudicial, tendiente a la adecuada defensa de los intereses de la Administradora Colombiana de Pensiones- COLPENSIONES, ante las Autoridades Judiciales y el Ministerio Público, realizando todos los trámites, actos y demás gestiones requeridas en los procesos o procedimientos en los cuales la administradora intervenga como parte pasiva, y que se adelanten en cualquier lugar del territorio nacional; facultad esta que se ejercerá en todas las etapas procesales y diligencias que se requieran atender ante las mentadas autoridades, incluidas las audiencias de conciliación judicial y extrajudicial. El poder continuará vigente en caso de mi ausencia temporal o definitiva como Representante Legal Suplente de la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, EICE, con NIT. 900.336.004-7, de conformidad con el inciso 6 del artículo 76 del Código General del Proceso, el cual establece que "tampoco termina el poder por la cesación de las funciones de quien lo confirió como representante de una persona natural o jurídica, mientras no sea revocado por quien corresponda." - -

CLÁUSULA SEGUNDA. - El representante legal de **BAE BUFETE DE ABOGADOS EXPERTOS S.A.S. CON NIT . 901.286.009-1** , queda expresamente autorizado, de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso, para sustituir el poder conferido dentro de los parámetros establecidos en el artículo 77 del Código General del Proceso, teniendo con ello facultad el apoderado sustituto para ejercer representación judicial y extrajudicial, de tal modo que en ningún caso la Entidad poderdante quede sin representación judicial y extrajudicial, y en general para que asuma la representación judicial y extrajudicial de la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES -----

La representación que se ejerza en las conciliaciones sólo podrá adelantarse con sujeción a las directrices del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones- COLPENSIONES, **CLÁUSULA TERCERA.** - Ni el representante legal de **BAE BUFETE DE ABOGADOS EXPERTOS S.A.S. CON NIT.901.286.009-1**, ni los abogados que actúen en su nombre podrán recibir sumas de dinero en efectivo o en consignaciones por ningún concepto. -----

Queda expresamente prohibida la disposición de los derechos litigiosos de la Administradora Colombiana de Pensiones-COLPENSIONES, por parte del

Ca515020861



13-11-24

cadena. nr. 59232340

República de Colombia



Aa097118769

NO. 44
34

[illegible]

Aa097118769

Se protocoliza autenticación biométrica.

Nelson J. Sanchez García

113949=BASMKVEPY

19-01-24

...and the ...

10

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26



Ca515020862

ESCRITURACIÓN- RESPONSABLES

Liquidó

Facturó

Cerró

Radicó

Rev / Legal

Identif / Huellas

Toma de firma en el documento

Digitó

4

[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*
[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*
[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*
[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

DIEGO ALEJANDRO URREGO ESCOBAR

CC 79983390 de Bogotá

Actuando como representante legal Suplente de la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, EICE, con NIT. 900.336.004-7

Teléfono :2170100 ext.: 1588

E-MAIL: poderesjudiciales@colpensiones.gov.co



NELSON JAIME SANCHEZ GARCIA

NOTARIO ONCE (11) ENCARGADO DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **66.959.623**
WEIMANN SANCLEMENTE

APELLIDOS
JAHNNIK INGRID

NOMBRES

[Handwritten Signature]

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **05-MAY-1975**

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

20-JUN-1994 CALI

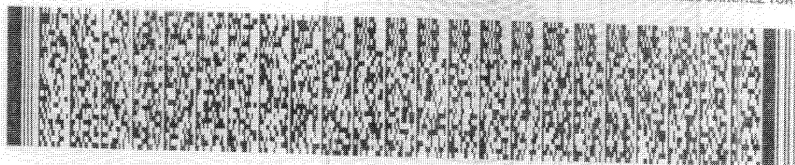
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten Signature]

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



INDICE DERECHO




A-3100150-00632980-F-0066959623-20141018

0040524157A 1

2813087127

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

217634 REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO

121179	18/03/2003	02/12/2002	
Tarjeta No.	Fecha de Expedición	Fecha de Grado	
JAHNNIK INGRID WEIMANN SANGLEMENTE			
66959623	VALLE		
Cédula	Consejo Seccional		
SANTIAGO DE CALI			
Universidad			
			
Presidente Consejo Superior de la Judicatura			

◊ FESA SA

11/2002-26135

37327

ESTA TARJETA ES DOCUMENTO PUBLICO
Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA
LEY 270 DE 1996, EL DECRETO 196 DE 1971
Y EL ACUERDO 180 DE 1996.

SI ESTA TARJETA ES ENCONTRADA, POR
FAVOR, ENVIARLA AL CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE REGISTRO
NACIONAL DE ABOGADOS.



Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 19/12/2024 11:04:44 am

Recibo No. 9733603, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824CQQNPB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: "BAE" BUFETE DE ABOGADOS EXPERTOS S.A.S.
Nit.: 901286009-1
Domicilio principal: Cali

MATRÍCULA

Matrícula No.: 1051235-16
Fecha de matrícula en esta Cámara: 15 de mayo de 2019
Último año renovado: 2024
Fecha de renovación: 08 de abril de 2024
Grupo NIIF: Grupo 3

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: CALLE 5 NORTE #1N - 73 BRR CENTENARIO
Municipio: Cali - Valle
Correo electrónico: diradmon@utwwlc.com
Teléfono comercial 1: 8819161
Teléfono comercial 2: 3148810277
Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: CALLE 5 NORTE #1N - 73 BRR CENTENARIO
Municipio: Cali - Valle
Correo electrónico de notificación: diradmon@utwwlc.com
Teléfono para notificación 1: 8819161
Teléfono para notificación 2: 3148810277
Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica "BAE" BUFETE DE ABOGADOS EXPERTOS S.A.S. SI autorizó recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.



Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 19/12/2024 11:04:44 am

Recibo No. 9733603, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824CQQNPB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 15 de abril de 2019 de Cali, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de mayo de 2019 con el No. 8751 del Libro IX, se constituyó sociedad de naturaleza Comercial denominada "BAE" BUFETE DE ABOGADOS EXPERTOS S.A.S.

TERMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto social. La sociedad tendrá como objeto principal prestación de servicios legales y el ejercicio de la profesión liberal de la abogacía. En desarrollo del objeto social la sociedad podrá: A) adelantar defensa jurídica y reivindicación de los derechos humanos de las minorías étnicas afrocolombianos e indígenas; para ello adelantar acciones de tipo civiles, acciones constitucionales, derecho público o privado. Acciones administrativas, penales, laborales, comerciales y el establecimiento de acciones mediante litigio estratégico. B) celebrar toda clase de contratos civiles o comerciales lícitos, que resulten necesarios para el cumplimiento del objeto social. C) adquirir, enajenar a cualquier título toda clase de inmuebles. D) tomar o dar dinero en préstamo. E) dar o recibir en garantía de obligaciones bienes de cualquier naturaleza. F) garantizar obligaciones de terceros. G) dar en prenda inmuebles e hipotecas. H) adquirir, vender, aceptar, cobrar, protestar, pagar o cancelar títulos abres y aceptarlos en pago. I) obtener derechos de propiedad sobre marcas, insignias, patentes o privilegios y cederlos a cualquier título. J) podrá ser representante de empresas nacionales o extranjeras con actividades comerciales y que se relaciones con su objeto principal. K) aportar a ella toda clase de bienes, celebrar contratos de sociedades, asociaciones o franquicias. L) celebrar los contratos de prestación de servicios que sean necesarios incluyendo contratos de trabajo, cuentas en participación y cualquier otro contrato legítimo. M) la explotación de negocios que constituyan su objeto y se relacionen directamente con él. N) adquirir o enajenar a cualquier título, intereses, participaciones o acciones en empresas de la misma naturaleza, o fines comerciales. N) obtener y explotar derechos de autor, licencias, concesiones, privilegios, marcas y patentes de invención que tengan relación con las actividades de la sociedad. O) suscribir acciones de capital o tomar participaciones en otras sociedades que tengan por objeto actividades similares o complementarias, transformarse, fusionarse o escindirse. P) celebrar todo tipo de contratos bancarios destinados a facilitar la buena marcha de la empresa. Q) establecer negocios inmobiliarios, para la compra y venta de bienes raíces. R) realizar y participar en procesos de asesoría y consultoría. S) prestar servicios de catering y en general, hacer a su propio nombre o por cuenta de terceros o en participación de ellos, toda clase de operaciones, ejecutar y celebrar toda clase de actos o contratos civiles comerciales que sean necesarios o convenientes para el logro de los fines que la sociedad persigue para la realización del objeto social. T) intervenir y participar en cualquier tipo de contratación estatal. U)



Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 19/12/2024 11:04:44 am

Recibo No. 9733603, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824CQQNPB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

brindar asesoría en procesos de: Restitución y formalización de tierras, declaración de bienes baldíos, transferencia gratuita de bienes fiscales urbanos y rurales para el desarrollo de programas de vivienda de interés social, saneamiento de predios rurales con falsa tradición y legalización y adjudicación de predios baldíos rurales. V) asesoría y consultoría seguridad informática.

Las partes acuerdan que las anteriores enunciaciones del objeto social, no son taxativas por lo tanto, sociedad podrá llevar a cabo cualquier actividad lícita y realizar en general todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

	CAPITAL AUTORIZADO
Valor:	\$6,000,000
No. de acciones:	600
Valor nominal:	\$10,000

	CAPITAL SUSCRITO
Valor:	\$6,000,000
No. de acciones:	600
Valor nominal:	\$10,000

	CAPITAL PAGADO
Valor:	\$6,000,000
No. de acciones:	600
Valor nominal:	\$10,000

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación legal. La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, llamado director ejecutivo, el cual tendrá uno o dos suplentes, que lo reemplazará en sus faltas absolutas, temporales o accidentales, ambos nombrados por el término de tres años (3) año cuya designación y remoción corresponderá también a la asamblea general de accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal. La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o



Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 19/12/2024 11:04:44 am

Recibo No. 9733603, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824CQQNPB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, Por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

Representación judicial. Se autoriza al representante legal de la sociedad para que conforme a lo establecido en el artículo 75 del código general del proceso, designe los abogados que representaran a la entidad en los procesos judiciales o administrativos que esta asuma e igualmente realice la sustitución de los mismos, para lo cual debe adelantar los tramites de inscripción en el certificado de existencia y representación legal.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por documento privado del 15 de abril de 2019, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de mayo de 2019 con el No. 8751 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SUPLENTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO	JOHN JAIRO TEJADA RUIZ	C.C.14944253

Por Acta No. 004 del 31 de mayo de 2023 ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de junio de 2023 con el No. 12035 del Libro IX , se removió del cargo de SUPLENTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO a JOHN JAIRO TEJADA RUIZ

Por Acta No. 02 del 16 de marzo de 2023, de Asamblea General De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de marzo de 2023 con el No. 5041 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	JAHNNIK INGRID WEIMANN SANCLEMENTE	C.C.66959623



Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 19/12/2024 11:04:44 am

Recibo No. 9733603, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824CQQNPB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta No. 003 del 04 de mayo de 2023, de Asamblea General De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 16 de junio de 2023 con el No. 11677 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SUPLENTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO	RAFAEL NUÑEZ LONDOÑO	C.C.1107067265

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cali, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 6910
Actividad secundaria Código CIIU: 7020
Otras actividades Código CIIU: 7490

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo provisto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es: MICRO

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$447,045,529

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU:6910



Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 19/12/2024 11:04:44 am

Recibo No. 9733603, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824CQQNPB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (onac) y sólo puede ser verificada en ese formato.



Ana M. Lengua B.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.030.589.841**

ARIZA CASTELLANOS

APELLIDOS

LUIS ALBERTO

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-FEB-1991

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

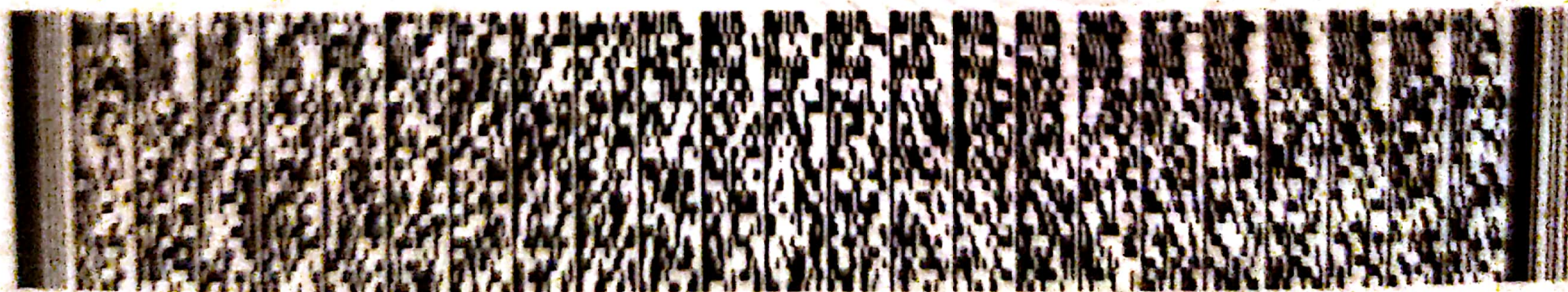
1.72
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

13-ABR-2009 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-1500150-00157724-M-1030589841-20090528

0011861863A 1

29031950



Consejo Superior
de la Judicatura

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO



NOMBRES:
LUIS ALBERTO

APELLIDOS:
ARIZA CASTELLANOS

PRESIDENTE CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA

AURELIO ENRIQUE RODRIGUEZ GUZMÁN

UNIVERSIDAD
INST. U. DE COLOMBIA

FECHA DE GRADO
22/11/2023

CONSEJO SECCIONAL
BOGOTA

CEDULA
1030589841

FECHA DE EXPEDICIÓN
30/11/2023

TARJETA N°
418875